

LAS SANCIONES AL SECTOR DEL PETRÓLEO Y DEL GAS Y A LA OLIGARQUÍA NO SON UNA FÓRMULA MÁGICA PARA PONER COTO A LA GUERRA DE PUTIN EN UCRANIA

Kate Watters

Tras la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022 los Estados occidentales procedieron rápidamente a imponer sanciones a gran cantidad de compañías y oligarcas de Rusia, particularmente con estrecha asociación a Vladímir Putin. En ese primer momento se pensó que, en el marco del régimen de sanciones vigente, una amenaza a los ingresos petroleros y gasíferos rusos constituiría una fórmula mágica de presión hacia el cambio. Sin embargo, hasta ahora esa fórmula no ha dado resultado.

La Ley Magnitsky y otras sanciones han limitado la capacidad de acumulación de riqueza de los cleptócratas rusos, además de dar a conocer internacionalmente acuerdos corruptos, incluso en el sector del petróleo y del gas. Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos han puesto de relieve la estrecha relación de esas personas con Putin. Los Gobiernos confiscan bienes de los oligarcas y restringen los viajes de los cleptócratas. La UE ha dispuesto un [embargo parcial](#) a las importaciones de petróleo ruso, que entrará en vigencia próximamente en 2022 y que [también puede impedir](#) que las aseguradoras brinden cobertura a dicho petróleo en sus pólizas, además de prohibir que los puertos de la UE acepten el crudo ruso que arriba en los tanqueros.

Si bien estas sanciones fueron concebidas para poner fin a la corrupción masiva y a la conducta cleptocrática de Rusia, mayormente no han logrado frustrar la increíble acumulación de riqueza de los oligarcas rusos y de su benefactor último, Vladímir Putin, lo que implica que el Kremlin sigue contando con los recursos económicos que precisa para financiar su invasión a Ucrania. Las iniciativas sancionatorias presentan vacíos que impiden su eficacia. Se aplican a algunos oligarcas y cleptócratas en un país, pero no en otro, lo que genera vías alternativas para la acumulación ilícita de riqueza. Asimismo, aunque supuestamente las empresas occidentales se “autosancionan”, el control es escaso como para tener la seguridad de que han cesado sus operaciones en Rusia como prometen.

VACÍOS EN EL RÉGIMEN DE SANCIONES

Varias organizaciones de fiscalización han identificado [importantes vacíos](#) en las sanciones vigentes, lo que permite que los magnates petroleros rusos, y por ende su Gobierno, continúen obteniendo ingresos de las actividades de desarrollo y de exportación de petróleo y de gas.

Aunque se han impuesto sanciones a [destacadas figuras](#) del sector gasífero y petrolero ruso, sus empresas —que aportan considerables rentas a la economía del país ([45 % de los ingresos del presupuesto en 2021](#))— siguen operando mediante el transporte de productos petrolíferos hacia Occidente a través del [Consorcio de Oleoductos del Caspio](#) (CPC), que conforma una [ruta de transporte esencial](#) para el crudo. Lleva el petróleo y el gas desde el oeste de Kazajistán, atraviesa Rusia y llega hasta el Puerto de Novorosiisk, desde donde se realiza la distribución a los mercados occidentales. Dado que esta gran red de oleoductos (ver el mapa [aquí](#)) está excluida del alcance de las sanciones, el flujo de sus ingresos sigue inundando Rusia, lo que implica que el CPC, las empresas de petróleo y gas de ese país y, en definitiva, el Kremlin, continúan enriqueciéndose.

Durante los primeros cien días de la guerra, Rusia recibió alrededor de [€ 93.000 millones](#) por exportaciones de petróleo, gas y carbón. Dos tercios de esas ganancias provienen del petróleo y la mayor parte del resto corresponde al gas natural. Asimismo, las empresas rusas poseen el [51 %](#) de las acciones del oleoducto de CPC, así como [inversiones](#) en los yacimientos petrolíferos que nutren dicho consorcio.

No obstante, el CPC no transporta solamente petróleo kazajo a Novorosiisk. Según el CPC, el [13 %](#) del petróleo del oleoducto proviene de Rusia, siendo extraído principalmente de los yacimientos operados por Lukoil, el [gigante gasífero y petrolero ruso](#). Aunque teóricamente es posible, resulta muy poco probable que ese petróleo procedente de Rusia y de otros países sea dividido para el transporte. Así pues, el crudo ruso se mezcla con la “combinación del CPC”, en su mayoría de origen kazajo, y se le coloca [otra marca](#), KEBCO (*Kazakhstan Export Blend Crude Oil*), de modo tal que en el CPC resulta casi imposible distinguir el mineral ruso del no que no lo es.

En consecuencia, la oligarquía y sus empresas pueden evadir las sanciones que impone Occidente y seguir beneficiándose del crudo trasladado por el CPC. Los propietarios del oleoducto recaban fondos mediante el cobro de tarifas fijas por transporte [que no están relacionadas con el precio del crudo](#), lo que hace que esos ingresos sean a la vez [lucrativos](#) y relativamente estables, a pesar de las fluctuaciones del mercado. En efecto, el ritmo de las exportaciones de CPC desde su terminal del Mar Negro fue un [3 % mayor](#) en 2021 que en 2020, por lo que sus accionistas, como Transneft, Lukoil y otras empresas rusas sancionadas, siguen percibiendo beneficios considerables, al igual que el Kremlin, que también ha registrado ganancias.

LA “AUTOSANCIÓN” NO ABARCA TODOS LOS ASPECTOS DEL NEGOCIO DEL PETRÓLEO

Además de las sanciones impuestas legalmente por los Gobiernos occidentales, las empresas petroleras de esa región supuestamente se “autosancionaron” e hicieron anuncios públicos de que no invertirían en Rusia o que desinvertirían en los proyectos en ese país. No obstante, hay vacíos importantes en estas “[autosanciones](#)”. Las empresas occidentales obtienen beneficios *fuera* de Rusia derivados del CPC. Por ejemplo, Shell [es propietaria de Oryx Caspian Pipeline LLC](#) (parte del consorcio de oleoductos) y accionista de Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited con una participación del 49 %. (El 51 % restante pertenece a Rosneft, cuyo Presidente, Igor Sechin, es un [asociado de larga data de Vladimir Putin](#)). En respuesta a una [nota](#) enviada por Crude Accountability y por varias ONG kazajas solicitándole a Shell que interrumpiera sus inversiones en el CPC, el secretario adjunto de la compañía, Anthony Clarke, [respondió](#) que “Por el momento Shell no tiene intención de abandonar el CPC, puesto que éste desempeña una función fundamental en el transporte del crudo kazajo hacia muchos países, en especial de Europa”.

Incluso hay constancia de que estas compañías y el Gobierno de Kazajistán continúan sosteniendo relaciones mercantiles con firmas rusas de cleptócratas sancionados, operadas por éstos. Las empresas occidentales han mantenido sus actividades comerciales lucrativas con sus homólogas rusas y con los yacimientos petrolíferos más importantes de Kazajistán, y obtuvieron enormes beneficios. Como el oleoducto de CPC quedó [exceptuado de las sanciones](#), esta red de petroleras, oleoductos y consorcios constituye un mecanismo para que los oligarcas rusos sancionados circunvalen las medidas de los Gobiernos y generen riqueza para sí y para sus socios, lo que revela un problema internacional mucho más amplio.

LA EXENCIÓN DE SANCIONES PARA EL SECTOR ENERGÉTICO RUSO ESCONDE PROBLEMAS PERSISTENTES BAJO LA ALFOMBRA

La cleptocracia, al igual que las compañías petroleras y de gas, es de naturaleza transnacional. Si los legisladores tienen la intención de hacer excepciones por pequeños porcentajes o beneficios menores aquí y allá, dichas compañías continuarán sus relaciones comerciales con autócratas, cleptócratas y actores no transparentes. Si ellas, y el CPC, quedan exentas de las sanciones, las redes internacionales de oligarcas y cleptócratas petroleros continuarán operando en forma impune, incluso en tiempos de guerra. El argumento de que el petróleo del CPC es principalmente kazajo cuando en realidad se extrae, refina y transporta en diversos países por empresas transnacionales no se condice con el carácter global del negocio y de las redes de riqueza que respalda.

Está claro que las ganancias derivadas del “petróleo kazajo” enriquecen al Kremlin y a sus socios, además de permitir que Moscú siga financiando su guerra en Ucrania.

Esta situación exige que los Gobiernos occidentales ejerzan un liderazgo sólido, no solo para que Putin rinda cuentas por la violación de compromisos internacionales, como con la OSCE, sino para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y de las compañías que los suministran. ¿Es fácil lograrlo? No. ¿Será posible hacerlo sin generar efectos para los consumidores o costos para los políticos y para las relaciones geopolíticas? No.

Aun así, es hora de que defendamos las normas de derechos humanos en nuestras interacciones con el sector del petróleo y del gas. Los actores autoritarios, cleptócratas y corruptos no pueden tener un pase libre, especialmente en el sector de la energía, entre otros. Vladímir Putin cuenta con que los intereses energéticos harán capitular a Occidente en su respuesta a la guerra en Ucrania. El futuro de la gobernanza y de la institucionalidad democrática, así como de la integridad territorial de Ucrania, exige que eso no ocurra.

Kate Watters es cofundadora y directora ejecutiva de Crude Accountability, una organización sin fines de lucro que trabaja por los derechos humanos y el ambiente con comunidades afectadas por la industria de los combustibles fósiles. Es autora de diversos informes sobre la sociedad civil de Asia Central y la región del Caspio, y ha sido entrevistada para publicaciones en medios gráficos, radiales y televisivos sobre temas ambientales, de petróleo, de gas y de derechos humanos en la región. Kate posee una Maestría en Estudios sobre Rusia de la Universidad de Georgetown y un título de grado en literatura rusa de la Universidad de Massachusetts (Amherst). Siga a Crude Accountability en Twitter [@Crude_NGO](https://twitter.com/Crude_NGO).

Las opiniones que se expresan en esta publicación representan los puntos de vista y el análisis de la autora y no necesariamente reflejan los de la National Endowment for Democracy ni los de su personal.